

SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, cuatro (4) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

SENTENCIA

Proceso : Ordinario de Segunda Instancia
Demandante : **DIVA NELLY QUINTERO PALACIO**
Demandadas : **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA, JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ**
Radicado : **05001 31 05 019 2017 00636 01**
Providencia : Sentencia
Temas y Subtemas : Seguridad Social – pensión invalidez de origen común-
Decisión : Revoca Sentencia absolutoria
Sentencia No : 248

En la fecha antes anotada el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, conformada por las Magistradas **LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE, LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZÁBAL y MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ, como ponente**, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado, que se traduce en la siguiente decisión¹:

¹ De conformidad con lo establecido en la Ley 2213 del 13 de junio de 2022 “...*Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del decreto legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...*”, que modificó el trámite en los procesos de la jurisdicción Laboral.

ANTECEDENTES

Pretensiones:

Se deje sin efectos los dictámenes de pérdida de capacidad laboral emitidos por las entidades demandadas y que conforme al aportado, a la señora Diva Nelly Quintero Palacio le asiste derecho al reconocimiento de **pensión de invalidez** de origen común; se condene al pago de mesadas pensionales a partir del **18 de marzo de 2015** en forma vitalicia, con los incrementos legales, **intereses moratorios** o en subsidio la **indexación**; pago de perjuicios por daño emergente y lucro cesante a cargo de las Juntas Regional y Nacional de Calificación de Invalidez; costas procesales.

Hechos relevantes de la demanda:

Se afirma que la señora Diva Nelly Quintero Palacio nació el día 26 de julio de 1964, padece *lumbalgia, osteoartrosis de la columna dorsal dolor crónico intratable, síndrome del manguito rotador ambas manos, fibromialgia, poliartrosis de ambas manos, síndrome del túnel del carpo leve, trastorno mixto de ansiedad y depresión, trastorno de comportamiento y adaptación*; fue calificada por **COLPENSIONES** el día **30 de julio de 2015**, asignándole el **45.1%** de pérdida de capacidad laboral (PCL) de origen común y fecha de estructuración el mismo día de la evaluación; al resolver los recursos interpuestos, el día 29 de abril de 2016 la **Junta Regional** de Calificación de Invalidez de Antioquia fijó el **43.50%** de PCL manteniendo la fecha de estructuración; por su parte la **Junta Nacional** de Calificación de Invalidez se pronunció el día 9 de febrero de 2017 confirmando la decisión de primera instancia.

Acudió ante la **IPS Universitaria** donde fue calificada con el **59.50%** de PCL estructurada el día **18 de marzo de 2015**, contando con 150 semanas cotizadas en los tres años anteriores a esta fecha.

Respuesta a la demanda:

COLPENSIONES a través de apoderado judicial, manifestó que no le constan los hechos afirmados en la demanda; se opuso a las pretensiones formuladas y formuló en su defensa las excepciones denominadas inexistencia de la obligación, prescripción, improcedencia de intereses de mora o indexación, buena fe, imposibilidad de condena en costas.

La **JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ** a través de apoderado, admitió la existencia de los dictámenes emitidos, afirmando que los únicos diagnósticos calificables a la luz del manual de calificación corresponden a *dolor crónico intratable (fibromialgia)* y *trastorno mixto de ansiedad y depresión* y que el concepto allegado no corresponde a una calificación, sino a un formulario prediseñado por alguien que carece de competencia; expuso que los órganos competentes para conocer las controversias contra los conceptos emitidos por las entidades del Sistema de Seguridad Social Integral y calificar el origen de las contingencias, son las Juntas de Calificación de Invalidez, aplicando los criterios técnicos del Manual Único de Calificación y la valoración de la paciente se encuentra ajustada a la condición real reflejada por su historia clínica, que en todo caso es inferior al 50% de PCL. Presentó oposición a lo pretendido en su contra y

propuso en su defensa las excepciones denominadas legalidad de la calificación, variación en la condición clínica de la paciente con posterioridad al dictamen de la Junta Nacional, inexistencia de prueba idónea, falta de requisitos legales para la solicitud de condena, inexistencia de la obligación, buena fe, genérica.

Por su parte, la **JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA** a través de apoderado, expuso que el dictamen emitido fue realizado conforme a lo dispuesto en el Manual Único de Calificación, con sustento fáctico en los antecedentes médicos y clínicos aportados. Propuso como excepción la inexistencia de fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones.

Sentencia de Primera Instancia:

El Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación de reconocer pensión de invalidez y absolvió a las codemandadas de las pretensiones formuladas en su contra por la demandante, a quien impuso condena en Costas, fijando como agencias en derecho la suma de \$300.000 correspondiendo una tercera parte para cada entidad.

Recurso de apelación apoderado del demandante:

Sostiene que el tema de la calificación de la invalidez es bastante técnico, en el informe aportado con la demanda se aplica muy bien la tabla 14.5 por deficiencias por enfermedades de tipo

cognitivo que involucran el sistema osteo muscular, hay un **dolor articular que origina la fibromialgia** y ésta lleva a una deficiencia secundaria, por eso el médico particular se aparta de los dictámenes emitidos por las demandadas, pues tiene en cuenta un **compromiso de estado general que agrupa todas las patologías** de la paciente, incluyendo el **estado depresivo**; el **dolor articular es la patología de base**, encuentra una deficiencia del 27.20% que es bastante alta y no puede dejarse de lado por no tener en cuenta un factor modulador; el **rol laboral** otorgado no corresponde con las restricciones de autosuficiencia económica y de edad cronológica; en estos temas hay **libertad probatoria** y en caso de duda probable, el Juez puede ordenar otra valoración, ya que está de por medio una pensión de invalidez, la ocupación de la demandante era en **oficios varios, no tiene estabilidad laboral, el trabajo físico genera un desgaste por lo que debió renunciar**. Solicita se revoque la Sentencia de Primera Instancia o se decrete de oficio otro dictamen ya que de todas maneras la demandante tiene asignada una deficiencia alta.

Actuación realizada en Segunda Instancia:

Mediante Auto del 18 de enero de 2023, esta Judicatura decretó prueba de oficio, consistente en dictamen médico laboral por parte del Centro de Estudios en Derecho y Salud – CENDES de la Universidad CES, con el fin de determinar la pérdida de capacidad laboral, el origen y la fecha de estructuración en el caso de la demandante, especificando cuáles son las tablas del Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional que debían aplicarse; teniendo en cuenta toda la información médica, incluyendo los dictámenes realizados por

COLPENSIONES, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, la Junta Nacional de Calificación de Invalidez y la IPS Universitaria (archivo 10).

Luego del trámite administrativo correspondiente para que COLPENSIONES efectuara el pago de los honorarios periciales, el día 4 de septiembre de este año el CENDES allegó el dictamen (archivo 24), del cual se corrió traslado a las partes por el término de tres (3) días (archivo 25).

Así mismo, por Auto del 2 de noviembre de este año, se requirió a la parte demandante y a COLPENSIONES para que se allegara historia laboral actualizada, aportada por el apoderado de la demandante y que obra en archivo 32 del expediente, de lo cual se enteró también a las partes, por Auto del día 9 de noviembre de 2023 (archivo 33).

Alegatos de conclusión:

Los apoderados de la demandante y COLPENSIONES reiteraron argumentos expuestos en primera instancia y al sustentar el recurso de apelación.

Agotado el trámite procesal correspondiente a este tipo de procesos y sin que se aprecie causal alguna de nulidad que invalide la actuación, se procede a resolver el asunto de fondo, previas las siguientes,

ONSIDERACIONES

La competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de Apelación, de conformidad con lo establecido en los artículos 57 de la Ley 2ª de 1984, 15 y 66A del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.

Conflicto Jurídico:

El asunto a dirimir, radica en verificar si es procedente revocar la Sentencia de Primera Instancia; analizándose si la demandante acredita el 50% o más de pérdida de capacidad laboral, como requisito para acceder a la pensión de invalidez de origen común.

Encontrando esta Sala de Decisión Laboral procedente revocar la Sentencia de Primera Instancia; por las siguientes razones:

No es objeto de discusión en esta Segunda Instancia, que la señora Diva Nelly Quintero Palacio nació el día 26 de julio de 1964 y cuenta con 59 años de edad, reclamó pensión de invalidez de origen común a COLPENSIONES el día 9 de junio de 2017 (folio 17 archivo 01 C01), sin constancia de haberse resuelto la solicitud; fue calificada por las siguientes entidades:

Entidad	Fecha calificación	Porcentaje PCL	Fecha estructuración	Deficiencias
COLPENSIONES	30/jul/2015	45.1%	30/jul/2015	Alteración de las extremidades superiores e inferiores, trastornos mentales y del comportamiento.

Junta Regional	29/abr/2016	43.50%	30/jul/2015	Trastorno del tejido conectivo, trastorno del humor.
Junta Nacional	9/feb/2017	43.50%	30/jul/2015	Trastornos del humor, enfermedades del tejido conectivo que involucra el sistema osteomuscular.
IPS Universitaria	Sin fecha	59.50%	18/mar/2015	Fibromialgia

El Juez de Primera Instancia, luego de analizar el contenido de cada uno de los dictámenes que reposan en el expediente, explicó en términos generales, que del informe con el cual se pretende atacar los emitidos por las entidades habilitadas para tal fin, **el médico Vargas Arenas básicamente se basa en la existencia de fibromialgia que surge de una enfermedad articular;** indicó que esta enfermedad consiste en un trastorno caracterizado por dolor músculo esquelético generalizado, con síntomas como dolor generalizado, fatiga, alteración de sueño y dificultades cognitivas, entre otros; se asocia con comorbilidades psicológicas y trastornos ansiosos de depresión; sostuvo que conforme al Manual Único de Calificación no debió calificarse con la tabla 14.15 como lo hizo el médico particular, debió calificarse desde el ámbito mental y la afectación concomitante o secundaria, al haber afectación del tema articular y del tejido conectivo, debiendo valorarse como fibromialgia concomitante y secundaria, acudiendo a dos tablas y no solo una como procedió el doctor Vargas Arenas y aún si compartiera tal calificación, encontró reparos al ubicarla en la clase IV con 75%, de cara a la situación reflejada en la historia clínica, reparando en la forma como fue aplicado el *factor modulador*, por lo que **restó credibilidad al informe aportado con la demanda.**

Sobre el tema objeto de apelación, esto es, la determinación de la pérdida de capacidad laboral para acceder a la

pensión de invalidez y la contradicción del dictamen, tenemos que **el artículo 41 de la Ley 100 de 1993** modificado por el artículo 142 del Decreto 019 de 2012, **contempla que corresponde** al I.S.S., COLPENSIONES-, a las Administradoras de Riesgos Profesionales – ARP hoy ARL-, a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte y a las Entidades Promotoras de Salud EPS, **determinar en una primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral, calificar el grado de invalidez y el origen de estas contingencias; pudiéndose controvertir ante las Juntas de Calificación de Invalidez del orden regional y nacional**, indicando expresamente que **contra dichas decisiones proceden las acciones legales.**

Por su parte, **la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia en Sentencia SL1044-2019**, reiterando CSJ SL5280-2018 y CSJ SL16374-2015, **indicó que el dictamen de la Junta de Calificación de Invalidez no es prueba solemne**, de modo que puede ser controvertido ante los Jueces del Trabajo y que **no es un requisito de procedibilidad agotar el trámite ante dichas Juntas**, ya que **la parte interesada puede acudir directamente ante la jurisdicción ordinaria laboral, solicitando una nueva valoración**, para que sea el Juez quien decida conforme a la sana crítica lo pertinente, a efectos de resolver sobre la pretensión demandada.

En el asunto bajo análisis, el apoderado de la demandante pretende se revoque la Sentencia absolutoria de Primera Instancia, a partir de la valoración efectuada a la señora Diva Nelly por el médico particular José William Vargas

Arenas, quien le otorgó el 59.50% de pérdida de capacidad laboral, estructurada el día 18 de marzo de 2015, con base en el cual **busca dejar sin efectos tres (3) dictámenes previos donde en ninguno alcanza el 50% de PCL**, emitidos en primera oportunidad por la Administradora de Fondos de Pensiones de la actora, revisado por las Juntas Regional y Nacional de Calificación de Invalidez previo agotamiento de los recursos de reposición y apelación.

Debiéndose indicar que, **la determinación de la estructuración de la invalidez es un aspecto técnico científico** que en principio debe ser definido por el órgano especializado, sin que pueda el Juez asumir ese carácter “...salvo que se trate de una *conclusión absolutamente contraevidente e inexcusable debidamente respaldada en un concepto técnico que dé al sentenciador mayor credibilidad sobre el dictamen emitido por la junta de calificación de invalidez organismo creado por la ley para el efecto...*” (Ver Sentencia **SL1035-2022**, negritas fuera de texto).

Por tanto, en el caso particular, la experticia aportada con la demanda debe estar revestida de una contundencia tal, que no amerite duda alguna para sobreponer su contenido, al de los dictámenes emitidos por los organismos habilitados en el ordenamiento jurídico para tal fin; aspectos que no se advierten en dicho informe, **siendo suficiente para restarle credibilidad, el hecho de no estar soportado en la historia clínica completa de la demandante, con todos los exámenes clínicos y de ayuda diagnóstica**, como dispone el artículo 3° del Decreto 1507 de 2014 por el cual se expide el Manual Único para la calificación de la pérdida de capacidad laboral y ocupacional.

Téngase en cuenta que el Juez aprecia el dictamen de acuerdo con las reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus fundamentos, la idoneidad del perito y su comportamiento en la audiencia, y las demás pruebas que obren en el proceso (art. 232 del CGP).

Y en este caso se observa que en el **informe del médico particular**, ítem *paraclínicos e interconsultas relacionados con la calificación*, **en valoraciones médicas solo relaciona del año 2015 medicina interna, ortopedia, reumatología, psiquiatría**; mientras que el dictamen de la Junta Nacional tuvo en cuenta no solo los ya mencionados del año 2015, sino también rehabilitación clínica del dolor y medicina general; del año 2016 incluyó reumatología, Instituto Colombiano del Dolor y múltiples atenciones por medicina general, del año 2017 recomendaciones por COMFAMA y atención por medicina general. En cuanto a **pruebas específicas**, el renglón **ayudas diagnósticas del dictamen particular aparece sin datos, en blanco** y en el de la Junta Nacional se incluyeron RX de manos comparativas (2014), gamagrafía ósea (2015), RX hombro derecho (2016), radiografías comparativas extremidades inferiores (2017); lo que denota que el dictamen de la Junta Nacional es más completo, integral y actualizado; al contrario, el aportado con la demanda incluyó información parcial de la historia clínica y no ofrece la suficiente certeza para restarle validez al primero, tal como explicó el Juez de Primera Instancia.

La anterior conclusión implicaría, en principio, la confirmación de la Sentencia absolutoria de Primera Instancia; no

obstante, debe tenerse en cuenta que **el Juez puede formar su convencimiento** inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba, estando facultado para acudir a unos medios de convicción con preferencia sobre otros, como lo permite el principio de libertad probatoria previsto en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y de acuerdo a lo señalado en **Sentencia SL877 de 2020** por el Órgano de Cierre de la especialidad laboral, si el Juez, para definir una determinada controversia, se ve enfrentado a varios dictámenes disímiles, podrá escoger para fundamentar su decisión, aquél que le merezca mayor credibilidad.

Contándose en el expediente con el **dictamen pericial decretado de oficio**, rendido por el Centro de Estudios en Derecho de la Universidad CES, a través del doctor José Manuel Méndez Carballo, Médico y Cirujano de la Universidad de Cartagena, Magister en Salud Pública de la Universidad de Antioquia, Especialista en Salud Ocupacional de la misma Universidad, Especialista en Valoración del Daño Corporal de la Universidad CES, Docente; dictamen que fue puesto en conocimiento de las partes y solo se allegó **pronunciamiento por el apoderado de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, quien manifestó que de acuerdo con dicho dictamen, la paciente alcanzó el grado de invalidez seis (6) años después de haberse expedido el de la Junta Nacional, tratándose de un empeoramiento de las condiciones de salud** y antes que desvirtuar la calificación de la Junta, la avala, en la medida **que de allí se infiere con certeza que para el año 2017 la señora Diva Nelly no era invalida** y por tanto, aquella valoración es coherente y no fue desvirtuada (archivo 28 C02).

En este dictamen, realizado el día 31 de agosto de 2023, le fue asignado el **50.50%** de pérdida de capacidad laboral de origen común, con **fecha de estructuración el día 25 de agosto de 2023** que corresponde “...a la **fecha de evaluación integral de su condición por el perito, en que se verifica la evolución y el estado actual de su trastorno del humor...**”, con base en las deficiencias (Osteo) artrosis primaria generalizada y trastorno depresivo moderado.

El Perito del CENDES explicó que con base en los conceptos médicos y pruebas diagnósticas reseñadas, los Rayos X de manos comparativas, la radiografía comparativa de miembros inferiores, Rayos X de hombro derecho, Rayos X de pie comparativas y la gamagrafía ósea, evidencian **cambios artrósicos degenerativos**, a diferencia de la sintomatología subjetiva de la fibromialgia; controvierte la conclusión del informe aportado con la demanda, detallando que no hay historial clínico o de seguimiento médico para la calificación de la fibromialgia con la tabla 14.15 - como pretende el apoderado de la demandante-; además, que la señora Diva Nelly presenta reintegro laboral exitoso, en los siguientes términos:

“...Para la calificación de la Fibromialgia por la Tabla: 14.15 Clase 4, consideramos que no hay un historial clínico o de seguimiento médico, que justifique su calificación, sobre todo, teniendo en cuenta su reintegro laboral exitoso, además que no es la Tabla con la cual se deba calificar. En el caso específico, consideramos que se debe calificar la Deficiencia de Trastorno Depresivo, por la Tabla: 13.2 y la Deficiencia por Fibromialgia más la Deficiencia por la artrosis generalizada, por la Tabla: 14.15. En la calificación de la IPS Universitaria, para la asignación de cambio de Rol laboral (15 puntos), consideramos que no hay argumentos ni justificación, dado su reintegro laboral exitoso como auxiliar de archivo, para la fecha...”

Dictamen pericial que será acogido en su integridad para resolver sobre la pretensión de la demandante, ya que ofrece suficiente credibilidad, se encuentra bien sustentado, fue rendido por profesional especializado con experiencia acreditada en el tema.

Según lo señalado en el artículo 38 de la Ley 100 de 1993, se considera inválida la persona que, por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral; requisito que acredita la demandante, al haber sido calificada con el **50.50% de pérdida de capacidad laboral, de origen común**, estructurada el **25 de agosto de 2023**.

En cuanto a la **densidad de semanas**, el artículo 39 ibídem modificado por el 1° de la Ley 860 de 2003, exige haber cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración. Y según historia laboral generada el 2 de noviembre de 2023, la demandante cuenta con **906 semanas cotizadas** en el régimen de prima media administrado por COLPENSIONES, entre el 30 de enero de 1992 y el 31 de enero de 2023 cuando reportó novedad de retiro, de las cuales, **61.72 fueron cotizadas entre el 25 de agosto de 2020 y el mismo día y mes de 2023** (archivo 32 C02); cumpliendo así con los requisitos exigidos para acceder a la pensión de invalidez de origen común.

Así las cosas, esta Sala de Decisión Laboral encuentra procedente **revocar** la Sentencia absolutoria de Primera Instancia; en su lugar, se **condenará a COLPENSIONES al reconocimiento**

y pago de la pensión de invalidez de origen común.

El **disfrute** de la mesada pensional se concederá a partir de la fecha de estructuración de la invalidez **-25 de agosto de 2023-**, en aplicación de lo dispuesto en el inciso final del artículo 40 de la Ley 100 de 1993 que dispone “...*La pensión de invalidez se reconocerá a solicitud de parte interesada y comenzará a pagarse, en forma retroactiva, desde la fecha en que se produzca tal estado...*”, **en cuantía equivalente al salario mínimo legal mensual vigente**, atendiendo a que las cotizaciones en pensiones se efectuaron con ese ingreso base de cotización; con derecho a **13 mesadas cada año**, por haberse causado en forma posterior al 31 de julio de 2011 según dispone el Acto Legislativo 01 de 2005, sin perjuicio de los incrementos legales y mientras persistan las causas que le dieron origen.

Por concepto de **retroactivo pensional** COLPENSIONES pagará a la demandante la suma de **\$2.552.000**, que corresponde a seis (6) días de agosto y las mesadas de septiembre y octubre de 2023.

A partir del 1° de noviembre de 2023, COLPENSIONES continuará pagando la pensión de invalidez a la demandante, en cuantía no inferior al salario mínimo legal mensual vigente, con derecho a 13 mesadas cada año, sin perjuicio de los incrementos legales y mientras persistan las causas que le dieron origen.

No se accederá a la pretensión de intereses moratorios, teniendo en cuenta que con las pruebas aportadas con la demanda no se demostró el estado de invalidez de la

demandante; imponiéndose condena con base en prueba decretada de oficio por esta Judicatura, con la cual se determinó una pérdida de capacidad laboral superior al 50% en el trámite del proceso, ante la evolución de la enfermedad que padece la actora, sin que exista mora en el pago de mesadas pensionales por causa atribuible a la entidad de seguridad social.

En subsidio se condenará al reconocimiento y pago de la indexación de las condenas, ya que constituye un factor que compensa la pérdida de valor real de los dineros que en su oportunidad debieron pagarse; causada desde la fecha de exigibilidad de cada mesada pensional, hasta la fecha en que se efectúe el pago de la obligación, de acuerdo con la certificación del DANE sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor, aplicando la siguiente fórmula:

$$\text{Indexación} = \frac{\text{Índice final}}{\text{Índice inicial}} \times \text{capital} - \text{capital}$$

No operó prescripción sobre mesadas pensionales –el derecho a la pensión no prescribe–, toda vez que se reconocen mesadas a partir del 25 de agosto de 2023, por cuanto la invalidez fue estructurada en el trámite del proceso.

Descuentos en salud:

Se autorizará a COLPENSIONES a descontar del valor del retroactivo pensional reconocido, las cotizaciones en salud que correspondan en los términos legales, conforme a lo

dispuesto en el artículo 143 inciso 2 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el artículo 42 inciso 3° del Decreto 692 de 1994 y previsiones del artículo 69 del Decreto 2353 de 2015, lo indicado por la **H. Corte Constitucional en la Sentencia SU 230 de 2015** y reiterados pronunciamientos de la **Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia**, entre otras, Sentencias **SL1338 de 2020 Radicado 64254, SL522 de 2018 Radicado 66940 y SL7911 de 2015 Radicado 5757**, en las que ha precisado que una vez surge el status de pensionado, por ministerio de la Ley surge la obligatoriedad de las entidades pagadoras de pensiones de descontar la cotización para el sistema de salud.

COSTAS:

Se revocará la condena en Costas de Primera Instancia impuestas al demandante; sin condena en Costas de Primera instancia, teniendo en cuenta que, si bien COLPENSIONES fue vencido en juicio, no se demostró cumplimiento de requisitos para acceder a la pensión de invalidez para la época en que se reclamó. **No se condena en costas en Segunda Instancia** al haber prosperado el recurso de apelación formulado por el apoderado de la demandante, conforme a lo establecido en el artículo 365 del Código General del Proceso y el Acuerdo 10554 de 2016 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, **EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: Se **REVOCA** la Sentencia de Primera Instancia, de la fecha y procedencia conocidas que por vía de Apelación se revisa; en su lugar, se **DECLARA** que la demandante señora **DIVA NELLY QUINTERO PALACIO C.C. 24.365.562**, tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez de origen común, por cumplir los requisitos señalados en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 1° de la Ley 860 de 2003; con disfrute a partir del **25 de agosto de 2023**, en cuantía equivalente al **salario mínimo legal mensual vigente**, con derecho a **13 mesadas al año**, sin perjuicio de los incrementos legales y mientras subsistan las causas que le dieron origen; en consecuencia, se **CONDENA** a la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES**, a reconocer y pagar a la demandante:

a) La suma de **\$2.552.000** por concepto de retroactivo pensional, liquidado desde el **25 de agosto de 2023** hasta el **31 de octubre de 2023**, ambas fechas inclusive.

b) A partir del **1° de noviembre de 2023**, COLPENSIONES continuará pagando a la demandante la pensión

de invalidez de origen común, en cuantía equivalente al **salario mínimo legal mensual vigente**, con derecho a **13 mesadas al año**, sin perjuicio de los incrementos legales y mientras subsistan las causas que le dieron origen.

c) Se **CONDENA** a **COLPENSIONES** a pagar la **indexación** sobre las mesadas pensionales reconocidas, desde la fecha en la que debió pagarse cada una de ellas, hasta la fecha en que se efectúe el pago de la obligación, de acuerdo a la certificación del DANE sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor y a la fórmula indicada en la parte motiva de esta providencia.

Todo lo anterior de conformidad con lo explicado en la parte considerativa de esta Sentencia.

SEGUNDO: Se **AUTORIZA** a **COLPENSIONES** a **descontar** del retroactivo pensional reconocido, **las cotizaciones en salud que correspondan en los términos legales**; conforme a lo expresado en las consideraciones.

TERCERO: Se **revoca la condena en Costas impuesta en Primera Instancia** a cargo de la demandante, en su lugar, se absuelve por este concepto. **Sin condena en Costas en Primera Instancia, ni en Segunda Instancia**; según lo indicado en la parte motiva.

CUARTO: Lo resuelto se notifica por **EDICTO**, en el término de un (1) día; se ordena devolver el proceso al Despacho de origen. En constancia se firma el Acta por quienes en ella intervinieron.

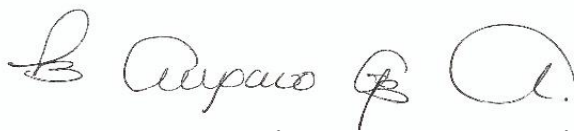
Las Magistradas,



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ
Magistrada Ponente



LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE



LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZÁBAL



**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SECRETARIA SALA LABORAL
EDICTO VIRTUAL**

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Proceso : Ordinario de Segunda Instancia
Demandante : **DIVA NELLY QUINTERO PALACIO**
Demandadas : **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA, JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ**
Radicado : **05001 31 05 019 2017 00636 01**
Providencia : Sentencia
Temas y Subtemas : Seguridad Social – pensión invalidez de origen común-
Decisión : Revoca Sentencia absolutoria
Sentencia No : 248

FECHA SENTENCIA: 4 de diciembre de 2023

Fijado martes 5 de diciembre de 2023 a las 8:00 a.m.

Desfijado martes 5 de diciembre de 2023 a las 5:00 p.m.

Lo anterior con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 ibídem. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del termino de fijación del edicto.

RUBEN DARIO LÓPEZ BURGOS
Secretario